

## LEGALIDAD SOCIALISTA 9 2006

*Revista de la Fiscalía General de La República de Cuba*



*“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. José Martí*

**LEGALIDAD SOCIALISTA**  
Año 3 No 9 , 28 de marzo del 2006

Revista electrónica editada por :

**LA FISCALÍA GENERAL DE LA  
REPUBLICA  
DE CUBA**

**CONSEJO DE REDACCION**

- Dr. Juan Escalona Reguera
- Msc. Rafael Pino Bécquer
- Msc.Carlos Raúl Concepción Rangel
- Msc.Francisco Javier Fernández Guerra

**DIRECTOR EJECUTIVO**

- Lic Miguel Angel García Alzugaray

**EDICION Y CORRECCION**

- Lic. Nelsy Gámez Pujol

**DISEÑO**

- Licmarie Lima Oña

**DIGITALIZACIÓN**

- Lic. Karschi Amorós Meneses

**REDACCIÓN**

Amistad 552 e/ Monte y Estrella  
Centro Habana, Ciudad de la Habana  
CP 10200

TelFax: (537) 867-0795

E-Mail: [relaciones@fgr.cu](mailto:relaciones@fgr.cu)

**RNPS 2076**

**RI: 134**

**SUMARIO**

*Presentación.....pag. 2*

*Efemérides:..... pag 3*

*Análisis Técnico Jurídico del  
Terrorismo..... pag 6*

*Eventos..... pag 37*

*Glosario de Términos  
Jurídicos..... pag 39*

*Noticias y Curiosidades..... pag 41*

La Revista Legalidad Socialista es una publicación trimestral. Los trabajos que en ella aparecen, expresan la opinión de cada autor, por lo que no constituyen criterios oficiales de la Institución. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de exponer sus opiniones mediante notas aclaratorias, así como tiene potestad para realizar los cambios que estime necesario en cuanto a los títulos, estructura, redacción de estilo o extensión de los trabajos presentados por los autores. Los especialistas en asuntos jurídicos o cualesquiera lector que tenga opiniones sobre los temas tratados, así como sugerencias para mejorar esta publicación, puede hacerlo mediante carta dirigida a esta Redacción.

## **PRESENTACION**

*Apreciado Lector:*

*Con el presente número, continuamos la edición periódica en formato digital de la Revista Legalidad Socialista, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba.*

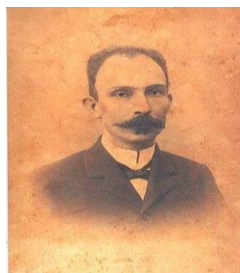
*Este medio de divulgación, tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de la conciencia jurídica ciudadana, mediante la publicación de materiales informativos y de carácter científico, sobre el fortalecimiento de la Legalidad, la lucha contra el delito y la protección de los derechos ciudadanos, labor que es nuestro afán continuar desde las páginas que brindamos a la consideración de nuestros lectores.*

*Convencidos además de que esta revista puede llegar a constituir un modesto aporte para la superación técnico-profesional y cultural de los juristas y personas interesadas en el desarrollo del Derecho, invitamos a todos los que deseen cooperar en este loable empeño, a enviar a su Redacción los artículos, monografías, ponencias y noticias que puedan coadyuvar a los fines precitados.*

**CONSEJO DE REDACCION**

## EFEMÉRIDES

**24 de Febrero de 1895**  
**111 Aniversario del “Grito de Baire”**



**José Martí, desde la emigración y como máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección en Oriente, al igual que en el resto del país. Para alcanzar sus objetivos independentistas, Martí se apoyó en las figuras más cimeras de la gesta anterior, y logró vertebrar un movimiento que respondió a sus órdenes sin vacilaciones. El 24 de febrero los complotados de Manzanillo, Bayamo, Jiguaní, Las Tunas y Holguín, así como el resto de la provincia acataron la orden recibida, y al grito de "¡Independencia o Muerte!" reiniciaron la lucha. Baire -pequeño barrio del municipio de Jiguaní- fue el lugar elegido para reiniciar la lucha, por lo que el Grito de Baire es sinónimo de 24 de Febrero de 1895. Antes de que finalizara el año, la guerra se extendía hasta el occidente del país: era inevitable la derrota del colonialismo español.**

No sería la del 1895 una «guerra contra el español, ni del desorden; ni de la tiranía», sino «un procedimiento político, la forma más bella y respetable del sacrificio humano». Sacrificio por el que Martí lo apostó todo, desde la separación definitiva de su «Ismaelillo del alma» hasta su propia vida, pues con el grado de Mayor General del Ejército Libertador caería en combate el 19 de mayo de 1895.

Con la desaparición física de José Martí, el ideal democrático de República tremolado en los campos cubanos el 24 de Febrero de 1895, se esfumaría. La verdadera Revolución no se haría en la manigua ni después; sería frustrada por la intervención militar norteamericana.

Cuba y las Antillas no fueron libres. Tampoco se pudo salvar, como él quería, la independencia de Hispanoamérica y el honor dudoso y lastimado de la América inglesa. Mucho menos, acelerar y fijar el equilibrio del mundo.

Hubo que esperar al 1o. de Enero de 1959 para asegurar la plena igualdad y soberanía de la Patria, y que los postulados martianos de democracia y justicia social se vieran cumplidos

**4 de Marzo de 1960**

## **El sabotaje al vapor La Coubre: 46 años de Patria o Muerte**

*Libertad quiere decir Patria, y la disyuntiva nuestra será ¡Patria o Muerte!*  
**Fidel**

Se cumplen 46 años de este acto de terror, que segó la vida de más de un centenar de cubanos, causó heridas a cientos de personas, daños materiales de consideración y privó al país de medios para su defensa. Es un hecho, cuyos detalles aún no están esclarecidos, se inserta en la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba.



**LA DECISIÓN DE DEFENDER A LA REVOLUCIÓN  
PESE A LOS ATAQUES DEL IMPERIALISMO SE  
HIZO PATENTE EN EL ENTIERRO DE LAS VÍCTIMAS.**

La hostilidad del Gobierno norteamericano hacia la Revolución data desde antes de su triunfo el 1ro. de Enero de 1959. La Administración de turno hizo denodados esfuerzos para que se frustrara el proceso revolucionario.

Los Estados Unidos dirigieron sus acciones para evitar que el Ejército Rebelde, garante político, junto al pueblo de la Revolución, se armara y defendiera y en este sentido presionó a países para que no vendieran armas a Cuba, junto con otras medidas para organizar a la contrarrevolución con el empleo de batistianos, desplazados del poder y afectados por las leyes revolucionarias de profundo contenido y beneficio popular.

Una fábrica proveedora de armas en Bélgica recibió presiones norteamericanas para evitar que vendiera armas a Cuba; personalmente el cónsul norteamericano en ese país y un agregado militar de esa Embajada presionaron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que no se honraran los contratos firmados, ni se entregaran esas armas.

A mediados de febrero, en el puerto belga de Amberes, el vapor La Coubre había cargado decenas de cajas de explosivos, granadas y municiones despachadas por vía férrea, debidamente custodiadas por la policía de Aduana, la gendarmería y el inspector especial del gobierno, Van Hoomisen. La carga había partido desde Bruselas por la firma Fielle, especializada en explosivos. Con anterioridad había cargado en Hamburgo, Bremen y Amberes 5 216 bultos de explosivos, entre estos 525 cajas de granadas y 938 cajas de municiones.

Su arribo a la capital de Cuba estaba previsto para el 2 de marzo y el regreso a Europa el 7 de abril con 340 toneladas de azúcar que serían embarcadas en el propio puerto. Ese mismo día 2 el periódico Revolución en su primera página denunció la agresión económica contra Cuba que preparaba entonces el Gobierno de turno en los Estados Unidos a la cual calificó como de segunda Enmienda Platt.<sup>3</sup> El día siguiente

el mismo diario publicó en español e inglés el texto íntegro del proyecto de ley del Congreso norteamericano que legalizaba el primer paquete de medidas económicas contra Cuba.(4) Meses más tarde, a fines de octubre, quedaban prohibidas todas las exportaciones de los Estados Unidos a Cuba, excepto medicamentos y algunos alimentos, y lo más insólito: ese país acusó a la Isla de agresión económica y comercial.

En ese contexto a las 3 y 15 del viernes 4 de marzo, una explosión estremeció la capital cubana en el lado Oeste de la bahía de La Habana: había sido el vapor francés La Coubre, cargado de municiones y explosivos. Una segunda explosión provocó más víctimas.

El día 5 de marzo al despedir el duelo de las víctimas de la explosión del barco, el Comandante en Jefe, entonces Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, dejó bien esclarecido y demostrado que todas las pruebas realizadas para determinar las causas del siniestro indicaron sin lugar a dudas que había sido producto de un sabotaje, preparado fuera del país. Se descartó toda posibilidad de accidente, para poder determinar lo único explicable: que había sido un hecho intencional en el exterior y la firme convicción de que se había urdido en los Estados Unidos, país interesado en privar a Cuba de medios de defensa.

Las autoridades norteamericanas por más de cuatro décadas han ocultado el conocimiento que tienen de este hecho, lo cual reafirma la hipótesis de su participación. ¿Cómo explicar a las autoridades de Francia y Bélgica que los Estados Unidos, en medio de su política hostil contra la Revolución, llegaron a concebir volar un barco cargado de explosivos donde murieron ciudadanos franceses y fueron dañados intereses belgas? ¿Cómo explicar a la opinión pública internacional, que un ciudadano norteamericano fue expuesto al peligro al enrolarlo en un barco cargado de explosivos, a su destino y que por azares de la vida escapó de la muerte minutos antes de estallar?

La demanda del pueblo cubano por conocer la realidad de este horrendo crimen se renueva cada día con la consigna de Patria o Muerte, que nació en el sepelio de las víctimas, para quedar para siempre en la voluntad de una nación amante y defensora de la paz, que rechaza la guerra, como rechaza el terrorismo y que aspira a construir un mundo mejor con todos y para el bien de todos.

## **15 de Marzo de 1878**

### **Protesta de Baraguá**



**El 15 de marzo de 1878, la Protesta de Baraguá, protagonizada por el Titán de Bronce, Antonio Maceo, y un grupo de patriotas mambises, proclamó frente al gobierno colonial español que los cubanos no aceptaban la paz sin independencia y sin la abolición de la esclavitud, objetivos por los cuales habían luchado en la manigua durante 10 años en las más difíciles condiciones.**

Solo la Revolución triunfante de Enero de 1959, dignificó con su obra las ideas y la verticalidad del principal héroe de Baraguá, que hoy trascienden su época y se insertan en la nuestra con fuerza de presencia.

Así, en este aniversario 128 de aquella histórica Protesta, Cuba, con la frente cada día más alta, puede suscribir con Antonio Maceo, no solo el No nos entendemos del 15 de marzo de 1878, sino también sus últimas palabras, durante el holocausto de San Pedro: **¡Esto va bien!**

\*\*\*\*\*



## ANALISIS TECNICO JURIDICO DEL TERRORISMO

**Msc. Israel Ybarra Suárez.**  
**Fiscal Fiscalía General de la República**

### 1. GENERALIDADES:

Las actividades delictivas nacionales e internacionales de carácter terrorista constituye una amenaza grave para la estabilidad social – política y la vida de innumerables seres humanos.

El Derecho Internacional, no ha permanecido, ni puede permanecer como mero espectador ante la internacionalización de un fenómeno tan grave como es el terrorismo, crimen que tiene como característica principal minar y lacerar la base sobre la que reposan el orden internacional y las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones.

El politicismo genuino de este delito, aunque aparezcan algunas variedades mixtas cuando se mezclan los móviles políticos con ataques personales, no implica benignidad en las sanciones, sino agravación, observable en la mayoría de las legislaciones modernas. Y especialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la época de “la guerra fría”, siendo en parte una consecuencia de las conmociones políticas que les siguieron y hasta precedieron, y cuya magnitud ha dado al traste con la privilegiada situación de la delincuencia política del siglo XIX.

En el Plan de Acción de Milán, efectuado en la ciudad de Milán, en los días comprendidos entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 1985, se expresó:

En la 5ta acción inciso f):

*A la luz de esas consideraciones generales, se formulan las siguientes recomendaciones como elementos esenciales de un plan de acción eficaz que se somete a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas:*

*f) Debe darse prioridad a la **lucha contra el terrorismo**, en todas sus formas, incluso, cuando proceda, mediante una acción coordinada y concertada de la comunidad internacional.*

Es por ello, que el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional se interesa por los actos y actividades terroristas que se desarrollan en la escena internacional en nuestros días, unos actos y actividades, que, por una parte, expresan tentativas de subvertir el orden internacional por medios y métodos



condenados por la comunidad internacional en su conjunto, por ejemplo la Resolución número 40/61, de 9 de diciembre de 1985, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otros actos y actividades terroristas aún cuando estén dirigidos contra el orden interno de un Estado, también pueden presentar aspectos internacionales en particular porque los terroristas aprovechan la división del mundo en Estados soberanos y la relativa permeabilidad de las fronteras internacionales, la colaboración, apoyo, incitación y compromiso de otros Estados, como por ejemplo los Estados Unidos de América en el caso del terrorismo contra Cuba por 47 años y más recientemente contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Nos corresponde en este momento tratar de brindar una definición del fenómeno del terrorismo, y lo hacemos conscientes de que en torno al concepto de terrorismo no existe acuerdo en la doctrina, para poder enmarcar este trabajo es necesario, o más preciso aún, imprescindible dejar sentado qué entendemos por terrorismo, y como es lógico y racional debe beberse de la historia.

Desde principios del siglo XX, se ha desarrollado una intensa actividad en aras de definir y unificar los diferentes conceptos e ideas en relación con el terrorismo. En 1927, se efectuó en Varsovia **“La Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal”**, que organizó la Asociación Internacional de Derecho Penal; en dicha conferencia se adoptó un texto de solo ocho artículos que estableció como elementos propios del terrorismo, el uso de medios capaces de producir un peligro común para la vida humana o la propiedad. Más tarde, en **“La IV Conferencia de París”** celebrada en el año 1931, se definió el terrorismo como la utilización de medios para aterrorizar a la población haciendo uso de bombas, minas, explosivos o recursos incendiarios.

En **“La V Conferencia”** efectuada en Madrid en el año 1934, se consideró al terrorismo como todo medio calculado para aterrorizar a la población y que tuviese el propósito de destruir cualquier organización social.

En **“La VI Conferencia”** celebrada en el año 1936, en Copenhague, se definió como la creación de un estado de terror.

En **“La VII Conferencia”** celebrada en el año 1937, exactamente el 16 de noviembre, en Ginebra para la prevención y represión del terrorismo en la Liga de Naciones, dejó fijado en su texto los postulados que reseñamos a continuación, aunque debemos aclarar que nunca se llegaron a poner en vigor por los acontecimientos anteriores a la Segunda Guerra Mundial:

1ro- ...”En la presente Convención la expresión –actos de terrorismo se entiende como hechos criminales dirigidos contra un Estado con el objetivo de provocar el terror contra personalidades determinadas, grupos de personas o el público.

2do- Instituyó la obligación para los Estados miembros de considerar como terrorismo los actos dirigidos contra la vida, la integridad física, la salud y la libertad de los Jefes de Estado o de aquellos que tuvieran esa prerrogativa y sus sucesores nombrados o hereditarios, sus esposas y las personas con responsabilidades públicas, siempre que los hechos fueran cometidos en razón de esas responsabilidades- . Los actos destinados a destruir propiedades que están al servicio público, así como la conspiración para cometer estos delitos.

4to- Los actos de terrorismo son actos que producen un efecto de terror o de intimidación sobre los habitantes de un Estado... a través del uso de métodos o de medios que, por su naturaleza, causan o pueden causar un daño extendido y disturbios serios en el orden público.

Esta Convención afirmó que el terrorismo no es un tipo uniforme de actividad criminal, que está constituido por una serie de delitos diversos, de distinta gravedad, castigados en todas las legislaciones pero entre ellos se destacan los atentados contra las personas (Jefes de Estado, Ministros, o multitudes anónimas) o contra la propiedad (mediante incendios o empleo de explosivos y productos biológicos.

**El periódico NEWSDAY**, de fecha 5 de mayo de 1971, afirmó... “para la administración de Reagan es el terrorismo la única variante moderna del anticomunismo de la guerra fría encausado a preparar a los estadounidenses, para una nueva ronda de intervenciones en el extranjero y aumento de los gastos bélicos”.

**El Convenio Europeo Sobre Represión al Terrorismo**, de 27 de enero de 1977, tampoco definió al terrorismo; en su artículo primero considera a sus actos como no políticos y, por consiguiente, no están excluido de la extradición, de lo que se colige que asume como delito de terrorismo.

- Captura ilícita de aeronave.
- Delitos graves constituidos por ataques contra la vida, la integridad corporal, la libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos.
- Los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes o secuestros arbitrarios.
- Los delitos realizados con bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas, o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilización represente un peligro para las personas.

Por su parte, América también se ha pronunciado contra el terrorismo a través de varios cuerpos legales pero en este caso solo nos referiremos a “**La Convención Interamericana Contra el Terrorismo**”, aprobada en la Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Interamericanos del 3 de junio de 2002, Resolución 1840 (XXXIL-0/02) en la cual se deja sentado los siguientes postulados:

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas:

Considerando que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros. Llama a los Estados a adoptar medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación internacional.

La Convención tiene como objeto específico prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, a tales efectos, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en la Convención.

En el año 1988, es decir, el 14 de marzo, se trató de definir al terrorismo durante la **Reunión de Expertos de las Naciones Unidas**, como “violencia ideológicamente motivada para inspirar terror dentro de un particular segmento de una sociedad dada, para protagonizar, solicitar o lograr perjuicios cualquiera que sean los autores, estén actuando por sí mismos, por otros o por un Estado”.

Ya la Asamblea General de las Naciones Unidas había realizado importantes declaraciones en contra del terrorismo a través de la Resolución 2625, (XXV) de octubre de 1970 y su Consejo de Seguridad, en su Resolución 1189 de 13 de agosto de 1998, donde se patentizó que todos los Estados tienen el deber de abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otros Estados o de participar en ellos, y de permitir actividades organizadas en su territorio, encaminadas a la comisión de dichos actos.

En resumen existen importantes instrumentos internacionales firmados a nivel global, que pueden hacer efectiva la lucha contra el terrorismo como son:

- Convenio para la represión del apoderamiento de aeronaves, firmado en La Haya, el 16 de diciembre de 1970.
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
- Convenio sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobado el 14 de diciembre de 1973.
- Convenio internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas firmado el 17 de diciembre de 1979.
- Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.

- Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicio a la aviación civil internacional complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, aprobado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, realizado en Roma el 10 de marzo de 1988.
- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental adoptado en Roma el 10 de marzo de 1988.
- Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, elaborado el 15 de diciembre de 1997.
- Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmado el 9 de diciembre de 1999.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en su 4385 sesión celebrada el 28 de septiembre de 2001, la Resolución 1373, dicho instrumento jurídico se inicia ratificando las Resoluciones 1269, de 19 de octubre de 1999 y 1368 de 12 de septiembre de 2001 y a continuación reafirma su condena inequívoca a los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, Washington, D. C., y Pennsylvania, el 11 de septiembre de 2001, y expresando su determinación de prevenir todos los actos de esa índole.

En la Resolución 1373/2001, reafirmó que los actos terroristas internacionales constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacional; enfatizó en el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, que ya había sido reafirmado en la Resolución 1368 de 2001; además enfatizó la necesidad de luchar con todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacional, representadas por los actos terroristas.

La misma insta a los Estados a trabajar de conjunto, urgentemente, para prevenir los actos de terrorismo, en particular, incrementando su cooperación y cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo que sean pertinentes.

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió:

Que todos los Estados prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo, tipifiquen como delito la recaudación de fondos para el terrorismo, congelen inmediatamente los fondos, activos financieros de cualquiera que permita que dichos fondos se utilicen en actividades terroristas, prohíba a los

nacionales o todas las personas y entidades el uso de fondo en actividades terroristas o de apoyo.

La propia resolución establece que los Estados deben dejar de apoyar a las personas o entidades que participan en actos de terrorismo o reclutamiento de miembros de grupos terroristas, adopte las medidas pertinentes para prevenir los actos terroristas, inclusive mediante la alerta temprana a otros Estados, *denieguen y den refugio a quienes financian, planifiquen, o cometan actos terroristas, presten apoyo a esos actos o proporcionen refugios, impidan que quienes financien, planifiquen, faciliten o cometen actos terroristas utilicen su territorio para esos fines en contra de otro Estado o de sus ciudadanos, aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participa, apoya de cualquier modo el terrorismo, que se proporcione la máxima asistencia y apoyo a otros Estados en la investigación y persecución de los actos terroristas, impida la circulación de terroristas o grupos de ellos por su país mediante controles efectivos en fronteras y controles de documentos de identidad.*

## I. 2 SOBRE EL CONCEPTO DE TERRORISMO.

Como todos conocemos no existe una definición universalmente aceptada sobre el terrorismo; frecuentemente es conceptualizado como violencia motivada políticamente, perpetrada contra objetivos no militares, por grupos o individualmente. Esta suele ser la explicación más tradicional y acogida, pero no la única pues hoy existen muchas definiciones de terrorismo que comparten un elemento común; la motivación política, aunque se critica con fuerza el hecho de no abarcar los móviles económicos o religiosos. Pero en nuestro criterio hay que tener muy presente también el vertiginoso crecimiento de las organizaciones transnacionales de corte criminal, y el rango y escala de tales operaciones, que trasciende en el uso de violencia de tipo terrorista para alcanzar objetivos cuya finalidad sea la obtención de beneficios financieros.

El terrorismo es un delito de tendencia, en el sentido de que requiere de una finalidad ulterior catastrófica o subversiva.

En el Derecho Internacional, la doctrina sobre el tema coincide en que, esporádico o generalizado, el terrorismo es una situación de angustia, zozobra sociológica, producida por una persona o grupo de personas, que por motivos económicos, religiosos, étnicos, culturales o políticos, quieren crear una situación de miedo generalizado o terror, para obtener un resultado que lleva implícita una finalidad política, que por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

La conducta terrorista afecta una diversidad de intereses y derechos tales como la vida y la integridad física la propiedad privada, la libertad, etcétera, considerados como bienes jurídicos individuales, la seguridad colectiva y los servicios públicos, entre otros bienes jurídicos de carácter colectivo.

El autor de los Estados Unidos de América, **J. Kirkhan**, señaló; es el terrorismo “instrumento para la consecución de diferentes fines, como campaña de violencia que provoca miedo”; también **B.M. Jenkins** añadiendo a **R.A. Folk**, enfatizó que era “expresión característica de la desesperación política”.

**E. Baulser, B. Miller y Ch, Russell**, lo describen como “amenaza de uso o uso de violencia o fuerza para lograr un fin político por medio del fomento del miedo, la coerción y la intimidación”.

Afirmaba, **Quintano Ripollés**, que se debe entender como terrorismo el empleo de medios violentos encaminados a causar terror en la población o en una parte de ella, con una finalidad política y social, supone utilizar criterios sociológicos, no jurídicos, y que definirlo como una estrategia política que se desarrolla a través de la violencia rebasa el acotado campo jurídico, para situarse en el político.

**Vives Antón**, definió al terrorismo de la siguiente forma; “actos terroristas son aquellos actos graves ejecutados por medios especialmente violentos, aptos para producir terror en la población o parte de ella. Comportan, al menos un peligro para la vida, la integridad o la salud de las personas, para bienes jurídicos más importantes. Se hayan dirigidos a subvertir total o parcialmente, el orden político constituido”.

Para el autor de los Estados Unidos de América **R Clotterbruck**, el terrorismo se convirtió en la forma primaria de todos los conflictos de nuestra época.

Por su parte, para **P. Wilkinson**, “el terror es producto de violencia fundamentalista y fanática, cometido para lograr un objetivo político determinado en aras del cual son sacrificados todas las consideraciones humanitarias y éticas”.

**Bueno Arus**, distingue dentro de las numerosas modalidades del terrorismo, un terrorismo de Estado y un terrorismo revolucionario, un terrorismo nacional y un terrorismo internacional, un terrorismo encaminado a la liberación de un territorio y un terrorismo dirigido a la opresión de una mayoría por una minoría que políticamente no podría obtener el poder, un terrorismo político y un terrorismo social que incide en el fenómeno de la lucha de clase.

Existen otras clasificaciones del terrorismo como son terrorismo subversivo, ideológico (separatista, fundamentalista, extremista, anarquistas) de igual forma y yo diría malintencionadamente se ha pretendido identificar el movimiento revolucionario, el movimiento de lucha y reivindicación de los pueblos y el sano

y legítimo derecho que a estos les asisten de luchar por su independencia, por su libertad, con los movimientos terroristas.

Aunque se presuma que todos los actos terroristas están motivados políticamente, la realidad evidencia que algunos de ellos están motivados por otros factores y el número puede aumentar de acuerdo con el aumento de la actividad criminal internacional. No podemos olvidar que un por ciento significativo de actos extremistas son ejecutados en nombre de causas religiosas; somos de la firme convicción que un enfoque más aceptado debe hacer menos énfasis en la motivación implícita en estos actos.

Se hace necesario observar esta definición desde el punto de vista gramatical, y a ese tenor expresa el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... “proviene del latín terror”...Dominación por terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Es decir, se distingue al terrorismo como la... dominación por el terror... aunque, en ocasiones, también se entiende como... el método o la teoría metodológica mediante la cual una organización o partido político intenta conseguir sus objetivos políticos, recurriendo a modos, preferentemente violentos.

**Debemos dejar acotado que la violencia tiene como propósito el infundir miedo, que toda acción cometida con el empleo de métodos peligrosos intentará provocar terror en la población, pues ello implica un acto de intimidación coercitiva, lo cual se puede incluir dentro de los definiciones de terrorismo.**

El significado de este término está relacionado con el uso sistemático, entre otros, del homicidio y la destrucción, con el propósito de aterrorizar individuos, grupos, comunidades y gobiernos, para que cedan a las demandas políticas de los terroristas.

Desde el punto de vista militar, se considera al terrorismo como una serie de actos de violencia destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas, en otras palabras como afirma el profesor **Cherif Bassioani**, desde la óptica militar las acciones terroristas tienen como fin crear un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista en aras de facilitar su dominación. El terrorismo tiene un objeto aparente, sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo y concluye el especialista en Derecho Penal Internacional, es el proceso terror-violencia y terrorista es la etiqueta que la sociedad atribuye a los perpetradores que inspiran actos de violencia.

Muchas legislaciones antiterroristas han identificado, generalmente, tres grandes grupos de conductas delictivas; en primer lugar, las que pueden denominarse, “materialmente terroristas”, que son aquellas conductas que se realizan para lesionar directamente los bienes jurídicos personales fundamentales -vida, integridad corporal libertad personal-; en segundo lugar los estructuralmente



terroristas conductas cuya peligrosidad radica en la existencia y fortalecimiento de la organización interna del grupo terrorista, y gira penalmente en torno a la figura de pertenencia o banda armada; y por último, los funcionalmente terroristas, actos cuya represión se fundamenta en la colaboración material con la banda armada.

En el Primer Congreso Iberoamericano de Facultades de Derecho en Viña del Mar, Chile en 1987, se definió el terrorismo como “una manifestación de violencia planeada y practicada por grupos organizados, con el fin de desestabilizar las instituciones de la nación contra la que actúa”. Se debe tener presente que este congreso se efectuó en Chile cuando se encontraba en el poder el gobierno de factor de Pinochet, y no se dijo nada del terrorismo de Estado, se obvió que el terrorismo puede ser empleado por un individuo aislado.

En diciembre de 1990, una Comisión Jurídica del Senado de los Estados Unidos de América lo definió, de la siguiente forma, “El terrorismo es la amenaza del uso, o el uso de la violencia, con el fin de producir efecto político simbólico, para influir psicológicamente, no solo sobre el grupo de personas contra las que se dirigen estos actos, sino sobre capas más amplias de la población”.

Para **Noam Chomsky**, politólogo de los Estados Unidos de América, el concepto social de terrorismo del gobierno de su país es “el uso calculado de la violencia, o de la amenaza de la violencia para obtener objetivos que son de naturaleza política, religiosa o ideológica realizado a través de la intimidación, la coerción o infundiendo miedo”.

**Michael Stohl**, también autor del propio país, enfatizó, “debemos reconocer que como convención, se describe normalmente que el gran uso del poder y la amenaza del uso de la fuerza, como diplomacia coercitiva y no como forma de terrorismo, aunque implica el uso de la amenaza y de la violencia para lograrlos, que se describiría como propósitos terroristas, si no fuera porque las grandes potencias siguen la misma táctica”.

Por su parte, **Igor Karpets**, señaló, “el terrorismo es el lenguaje de los extremistas, generado por las relaciones sociales de explotación. Ha saltado sus fronteras nacionales y se ha convertido en un serio peligro para el desarrollo normal de las relaciones internacionales”.

En otras palabras el terrorismo es la difusión del miedo; en el Derecho Penal Internacional, es el proceso terror- violencia y el terrorista es la etiqueta que la sociedad atribuye a los perpetradores que inspiran actos de violencia.

El término terror fue acuñado por los jacobinos en Francia<sup>1</sup>, y ha sido utilizado a través de la historia con fines políticos por las clases dominantes.

---

<sup>1</sup> Los Jacobinos en 1783, han pasado a la historia como un gran ejemplo de lucha verdaderamente revolucionaria contra la clase de los explotadores. El gobierno francés jacobino negó de modo sistemático todo tipo de proposiciones para

El término terrorismo, no debe reducirse al simplismo legal, según el cual, todo acto de confrontación violento contra un determinado sistema social y económico o un gobierno, es un acto terrorista.

Para **Gonzalo Fernández de Mora**, “el terrorismo es la forma contemporánea de la guerra, que no es la atómica ni la convencional y es un delito especial dentro de los delitos de guerra”.

**Alexandro Baratta**, delimitó la violencia terrorista desde el punto de vista material y sustancial con otras formas de violencia (de masas, criminal, de Estado); la conclusión, entre su forma más manifiesta y patente y las formas específicas, a través de las cuales se manifiesta, pudiendo considerar la dimensión material, la dimensión social en su localización al interior de la sociedad, fenómeno social extraño a la dimensión social y en particular su carácter funcional con respecto a los cambios estructurales y su dimensión histórica, consistente en enseñar los orígenes históricos del fenómeno, su evolución, la relación existente entre éste y el medio histórico donde está localizado. Se trata de conocer las conexiones e interdependencias existente entre el fenómeno, sus condiciones y sus funciones, analizando:

1) el fenómeno, 2) las condiciones del fenómeno, 3) las formas del fenómeno y señalaba como ejemplo el terrorismo negro en Italia, como estrategia de tensión a propósito de frenar el movimiento obrero, se vincula a la ideología fascista y buscaba instalar un régimen reaccionario; utiliza atentados indiscriminados y no reivindicados; y el terrorismo rojo, supuesta vanguardia armada del movimiento proletario y de corte antimperialista: ataca a personas o lugares que constituyen símbolos del poder del Estado y el poder Económico. (los anarquistas). No constituye un grupo delictivo, sino más bien un crimen o una serie de crímenes que se tipifican por la alarma que producen, ordinariamente motivados por los medios de estragos que suelen utilizar los terroristas, atendiendo a la esencia revelada por el motivo, puede ser delito contrarrevolucionario, un delito social o un crimen común.

El actual Secretario General de las Naciones Unidas, **Kofi Annan**, ha expresado que la definición debe sustentarse en el principio de que no se puede aceptar a quienes buscar justificar la deliberada toma de vidas civiles inocentes.

Para poder realizar un análisis multilateral del terrorismo, se hace necesario abordar los términos **asilo, refugiados, derechos humanos y extradición**.

### 3 - ¿Qué es el Asilo?

El asilo es la protección jurídica y política que un Estado ofrece, discrecionalmente, a nacionales de otro Estado, ya sea en su territorio, ya sea en otro lugar bajo su jurisdicción.

El asilo es una medida de carácter protector encaminada a sustraer al extranjero de la agresión del Estado que injustamente lo persigue o sanciona, apoyándose mediante su permanencia en territorio del Estado receptor y el reconocimiento de un status jurídico a tal efecto.

El asilo territorial es, hoy en día, la protección que un Estado decide ofrecer en su territorio a un individuo, nacional de un estado distinto o apátrida, que es objeto de persecución *latos sensu* o que ha cometido un delito considerado por ese Estado como delito político.

En torno al derecho de buscar asilo expresa en su artículo 14, párrafo primero “La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, *“en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”*”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó posteriormente, la Resolución 2312, (XXII), de 14 de diciembre de 1967, que contiene la Declaración Sobre el Derecho de Asilo Territorial.

De la práctica de los Estados, y de la Resolución 2312, XXII, se desprende que el asilo territorial se concede o no en el ejercicio de la soberanía de los Estados.

Es de resaltar, como señala Escobar Hernández, se reconoce un vínculo entre asilo y refugio mediante una remisión material a la Convención de Ginebra y al Protocolo de Nueva York, consideradas como referencia normativa básica y marco homogéneo de una política común de asilo.

Por tanto, el asilo se reduce e identifica con la figura del refugio de la Convención de Ginebra de 1951, solo la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR), y la existencia de otras obligaciones internacionales, en particular el Convenio de Ginebra de 1951, y el Protocolo de 1967, garantizará la uniformidad del tratamiento de las solicitudes ante la falta de armonización material y formal del asilo, ya que la inexistencia de una regulación material y formal del asilo a nivel comunitario hace que las solicitudes se estudien en base al Derecho interno de cada Estado.

Por otra parte, se regula la tramitación de solicitud de asilo presentada por extranjeros<sup>2</sup>; en el caso de la Comunidad Europea el artículo primero del

---

<sup>2</sup> Entendiendo como extranjero en este trabajo, toda persona que no sea nacional del Estado a que se solicita el asilo.

Convenio de Aplicación de Schengen extiende el concepto de extranjero solo a los ciudadanos que sean de un Estado distinto al de la Unión.

La consideración de la Unión Europea, de que para la realización de los fines de la Unión, en particular de la libre circulación de personas, la política de asilo es de interés común, para reafirmar la relación existente entre asilo e inmigración.

### **1.III - El Refugio y Derechos Humanos.**

Las grandes necesidades humanitarias provocadas por grandes guerras del siglo XX, llevaron a la Organización de Naciones Unidas. O.N.U, a continuar e intensificar los esfuerzos dedicados en el período de entreguerras a la protección de los refugiados. Se crearon en el seno de las Naciones Unidas, los instrumentos normativos necesarios a estos fines; La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, elaborado en Nueva York el 31 de enero de 1967.

El refugiado, es aquella persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones, etcétera, se ve obligado a buscar refugio en país extranjero <sup>3</sup>.

Esta definición coincide prácticamente con el sentido común que se le da a esta expresión, es decir, persona que se ve obligada a abandonar su lugar de residencia y buscar refugio en cualquier otro lugar, bien sea por causa de desastres naturales o de acontecimientos provocados por los hombres. Ahora bien, debemos tener presente que las personas que buscar refugio por cuestiones naturales requieren ayuda material y asistencial; mientras que las otras requieren, sobre todo, protección jurídica. La diferencia con el emigrante ordinario va a ser que éste elige vivir fuera de su lugar de residencia habitual y el refugiado, sea por la causa que sea, se ve obligado a ello.

La convención de 28 de octubre de 1933, relativa al Estatuto de Refugiado, antes de la Segunda Guerra Mundial, se refería esencialmente a Europa. Hubo un Comisionado para los refugiados en el marco de la Sociedad de Naciones; sin embargo, se dispusieron acuerdos concretos para situaciones específicas, porque entonces no habían refugiados en general, sino eran refugiados rusos, turcos, armenios, sirios, alemanes y austríacos.

La primera vez que apareció en un texto jurídico internacional la mención concreta de las causas, por las que una persona abandona su lugar de residencia, fue en mandato dado al Comité Intergubernamental sobre Refugiados de 1938, y como lógica consecuencia, hubo que establecer un procedimiento de elegibilidad individual.

---

<sup>3</sup> Casares, Julio: Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Ed, Gustavo Gili, S:A, Barcelona, 1984, p. 715.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad Internacional tuvo que volverse a hacer eco del problema de los desplazamientos masivos que provocan las guerras y las situaciones de intolerancia, pero el procedimiento individualizado para conocer las individualidades de su huida o persecución resultó impracticable ante las avalanchas humanas que buscan refugio.

De lo anterior se colige, que el concepto de refugiados aparece en el orden internacional ligado tanto al desplazamiento masivo de personas como a la persecución concreta.

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogió en su artículo 14.-1 un derecho humano que considera fundamental; “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y disfrutar de él, en cualquier país”, del anterior precepto podemos observar los siguientes elementos:

- La proclamación del derecho de asilo como derecho humano.
- El hecho de que se trata de un derecho, que corresponde a la persona humana sin la correspondiente atribución de un deber para ningún Estado en particular.

De la lectura de esta proclamación salta a la vista que la misma no fue suficiente, y que se hacía necesario entonces un instrumento internacional, cuya concepción no dependiera de cómo ejerciera el Estado implicado la competencia de decidir a quien le otorga el asilo. Por ello surge, La Convención de Ginebra. relativa al estatuto, de 28 de julio de 1951<sup>4</sup>, a partir de este momento, nace esa nueva categoría objetiva cuya protección ya no va a depender de la arbitrariedad o discrecionalidad del Estado.

El artículo 1 inciso a) párrafo segundo de la Convención relativa al Estatuto del Refugiado de 28 de julio de 1951 entiende por refugiado a toda persona que:

*... “Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección del país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país en que antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.*

Por vez primera, existe una definición jurídica, a nivel de un tratado multilateral que devendría en universal. Éste, por un lado es muy bondadoso, pero por otro, restringe el ámbito de aplicación *ratione personae* de los beneficios de la calificación de refugiado.

---

<sup>4</sup> Esta Convención se firma el 28 de julio de 1951, de acuerdo con la Resolución de la Asamblea General número 429, V de 14 de diciembre de 1950, y entra en vigor el 22 de abril de 1954.

Sin la pretensión de hacer un análisis exhaustivo de la definición, quisiera destacar la frase “**fundados temores de ser perseguida**” pues en mi criterio es la parte esencial de la definición, ya que esta, por una parte implica un elemento subjetivo como el **temor** lo que supone un criterio racional difícilísimo de destacar a posteriori, pero esencial para determinar la condición de refugiado. Por ello la condición de refugiado requiere primordialmente una evaluación de las declaraciones del solicitante más bien un juicio sobre la situación imperante en su país de origen. Por otra parte implica otro elemento objetivo como el **temor fundado**. Esto significa que no es solo el estado de ánimo de la persona interesada lo que determina su condición de refugiado, sino que esa tesitura debe estar basada en una situación objetiva.

Cuba, ha sido a lo largo de los últimos 47, años víctima de manipulaciones de este tipo a través del Departamento de Refugiados de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América en La Ciudad de La Habana, como parte de la política de agresión y descrédito que orquesta ese gobierno hacia Cuba.

El asilo y el refugio, están en íntima conexión; uno y otro se sitúan en el ámbito del régimen de extranjería contemplado por el Derecho Internacional, y se caracterizan por constituir estatutos especiales frente al trato común otorgado a los extranjeros.

En el Derecho Internacional contemporáneo, el régimen de extranjería se enriquece y beneficia de las normas sobre el respeto de los derechos de toda persona humana con independencia de su nacionalidad<sup>5</sup>.

Pero asilo y refugio tienen un régimen jurídico distinto en Derecho internacional. El estatuto de refugiado y los requisitos de su reconocimiento tienen como marco de referencia la Convención de 1951, y el Protocolo de 1967, y a diferencia del asilo, el reconocimiento del estatuto del refugiado no tiene carácter discrecional. En efecto, la concesión del asilo territorial es una facultad inherente al ejercicio de la soberanía del Estado, y el solicitante no es, en Derecho Internacional, titular de derecho subjetivo alguno a obtener asilo en un Estado determinado. Caso distinto es que, en el derecho interno de algunos Estados, el asilo sea un derecho fundamental, incluso de rango constitucional<sup>6</sup>. Por el contrario aquellos que cumplen los requisitos previstos en el artículo 1ro, inciso a), de la Convención de Ginebra de 1951, tienen derecho al reconocimiento de estatuto de refugiado tal y como quedó modificado por el párrafo 2do, del artículo I, del Protocolo de 1967, el apartado 2do del artículo 1ro, inciso a) de La Convención de 1951, establece que “*el termino refugiado se aplica a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera*

<sup>5</sup> Pastor Ridruejo José Antonio: Curso de Derecho Internacional público y Organización Internacional, 4ta ed., Madrid 1992, p.251.

<sup>6</sup> López Garrido Diego: El Derecho de Asilo, Madrid 1991, p.12.

*acogerse a la protección de tal país”*. De lo anterior se colige que el derecho de asilo es un derecho subjetivo que se corresponde con la obligación internacional de los Estados partes en la Convención de reconocer dicho estatuto.

El objeto y fin de la Convención de 1951, se contradiría con la aceptación de excepciones a la obligación de los Estados partes de reconocer en las condiciones previstas el estatuto de refugiado. Ningún límite se puede deducir del texto del artículo 1ro, pero, además la propia Convención de 1951, -artículo 42- y el Protocolo de 1967, artículo VII, prohíben la reservas al mismo.

En virtud del artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, en relación con el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados estar obligados a cooperar de buena fe con el relator especial de la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas sobre la Tortura.

## **1.- V Terrorismo y Extradición.**

Hay quienes afirman que el terrorismo es esencialmente de índole político. De ahí que, en algún momento, los Estados que sintonizar con las reivindicaciones de quienes recurren a actos y actividades terroristas, se prevalgan del concepto de delito político para proteger a los responsables. Y es que, desde principios del siglo XIX, el pensamiento liberal dominante en el seno de los Estados vino a consagrar, tanto en derecho interno como en el Derecho Internacional, el principio de no extradición por delitos políticos<sup>7</sup>.

No obstante ya que los actos y actividades terrorista son contrarias a los derechos humanos y libertades fundamentales – por no mencionar que el terrorismo internacional puede poner en peligro la paz y la seguridad internacional- la lucha contra el terrorismo en el marco de la cooperación internacional entre los Estados, se ha traducido en la adopción de diversos tratados internacionales, universales<sup>8</sup> y regionales, cuyo principal propósito es despolitizar los actos y

<sup>7</sup> Francia desde la Constitución de 1793, se proclamó tierra de asilo para los que luchar por la libertad. Cuba en su artículo 13 de la Constitución también lo enuncia.

<sup>8</sup> Ya en tiempo de la Sociedad de Naciones, se adoptó una convención para la Prevención y Represión del terrorismo y otra para la creación de un Tribunal Penal Internacional, pero nunca entró en vigor. Se abrieron a la firma en Ginebra el 16 de noviembre de 1937, pero la I Convención fue firmada por 24 Estados y tan solo ratificado por la India, mientras que la segunda Convención no fue ratificada por estado alguno.

En el sistemas de las Naciones Unidas se trató de despolitizar el terrorismo internacional mediante la identificación de algunas de sus manifestaciones. La OACI tomó la iniciativa para la prevención y represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil internacional, y fue seguida por la OMI ((actos contra la seguridad de la navegación marítima), y la OIEA(actos contra la seguridad de materiales nucleares). En particular, la OACI auspició el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Actos cometidos a Bordo de las Aeronaves, adoptado en Tokio, el 14 de septiembre de 1963, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, adoptado en la Haya el 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, aprobado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, en la conferencia de Montreal efectuada entre el 12 de febrero y el 1ro mayo de 1991, es decir, la Conferencia Diplomática convocada por la OACI.

La OMI auspició el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y el Protocolo para la represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, aprobado en Roma el 10 de mayo de 1988.



actividades terroristas, a los efectos de la extradición. Los debates en la Asamblea General de las Naciones Unidas propiciaron la adopción de otros tratados y, sobre todo, la generalización de la obligación *aut debere aut judicare*<sup>9</sup>.

El terrorismo ha sido condenado por la Organización de Estados Americanos, O.E.A.

En resolución aprobada en la sexta sesión plenaria celebrada el 30 de junio de 1970, la O.E.A calificó el delito de terrorismo. La acción y política general de la organización respecto de los actos de terrorismo y, en especial el secuestro de personas y la extorsión conexas con ese delito – AG/Res. 4 (1/E/70)-, destaca en su parte resolutive:

Resuelvo:

1. . Condenar enérgicamente los actos de terrorismo y en especial el secuestro de personas y la extorsión conexas a este delito como crímenes de lesa humanidad.
2. . Condenar también dichos actos cuando son perpetrados contra representantes de Estados Extranjeros como violaciones no solo de los Derechos Humanos, sino también de las normas que rigen las relaciones internacionales. Es decir crímenes contra la Paz y el Derecho Internacional.

La calificación del terrorismo como crimen de lesa humanidad dentro del sistema jurídico interamericano es significativo, porque tan solo dos años antes de esta resolución se había suscrito en la O.N.U. “La Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad<sup>10</sup>, que hacen imprescindibles aquellos declarados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1945.

La O.E.A. añadió el delito de terrorismo a los ya consagrados, pero con la novedad de que cuando tales actos se ejerzan contra “representantes de Estados Extranjeros, los mismos no se consideran que solo violan los Derechos Humanos,

---

La OIEA, por su parte, auspició la Convención Sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares adoptado en Viena el 3 de marzo de 1980.

<sup>9</sup> La Asamblea General de las Naciones Unidas, no discutió el tema del terrorismo internacional hasta su introducción en el programa del XXVII, período de sesiones. Sobre la problemática que plantó el fenómeno del terrorismo internacional en los primeros debates en la Asamblea General tras superar los planteamientos opuestos sugeridos en un principio por los Estados, el trabajo del Comité Especial sobre el terrorismo internacional (Comité de los 35) creado por la Resolución 3034 (XXVII) permitió que al principio de la década de 1980, se alcanzara el consenso en la Asamblea General – así por ejemplo en la Resolución 40/61 de 9 de diciembre de 1985, o la Resolución 46/51 de diciembre de 1991- un consenso que desde entonces ha presidido los debates sobre el tema. También éstos debates propiciaron la adopción de los tratados internacionales en el seno de las Naciones Unidas, que prosiguen la aproximación sectorial al fenómeno del terrorismo internacional; la Convención Sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos y la Convención Internacional contra la toma de Rehenes, adoptadas ambas en Nueva York el 14 de diciembre de 1973, y el 17 de diciembre de 1979, respectivamente.

<sup>10</sup> El 26 de noviembre de 1968, y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.

sino que además se constituyen como crímenes contra la Paz y el Derecho Internacional al violar “las normas que rigen las relaciones internacionales”.

La condena al terrorismo alcanzó su colofón en la O.E.A. al aprobarse “La Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa, cuando estos tengan trascendencia internacional.

Al aprobar dicha convención, la O.E.A. se preocupaba especialmente por los actos delictivos contra personas que merecen protección especial, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional y que dichos actos revisten trascendencia internacional por las consecuencias que pueden derivarse para las relaciones entre los Estados.

El artículo 2 nos ofrece la siguiente definición:

*Para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de trascendencia internacional, cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y contra la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al Derecho Internacional, en el caso de no contemplarse en la legislación de los Estados signatarios el delito de Terrorismo de la Convención, se aplicará el artículo 8 inciso d) que señala.*

*Los Estados aceptan las siguientes obligaciones.*

*d) Procurar que se incluyan en sus respectivas legislaciones penales los hechos delictivos en materia de esta Convención, cuando no estuvieren ya previstos en aquellos.*

Otro importante paso, en la lucha contra el terrorismo, lo constituyó sin dudas “La Convención Sobre la Prevención y el Castigo de Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos”, de 14 de diciembre de 1973; este cuerpo jurídico internacional considera que “los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas, al colocar en peligro la seguridad de esas personas, crean una seria amenaza para el mantenimiento de las relaciones normales, que son necesarias para la cooperación entre los Estados”.

El artículo 1ro, define que una persona internacionalmente protegida es:

- a) un Jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando... cumpla las funciones de Jefe de Estado un Jefe de Gobierno o un Ministro de Relaciones Exteriores, siempre que tal persona se encuentre en un Estado Extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañen;*
- b) Cualquier representante o funcionario de un Estado... que en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su*

*residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho, conforme al Derecho Internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad, dignidad, así como los miembros de su familia que formen parte de su casa.*

El artículo 2do define el delito de la siguiente forma.

- a) la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida.*
- b) La comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad.*
- c) La amenaza de cometer el atentado; y*
- d) La tentativa de cometer el atentado; y*
- e) La complicidad en tal atentado.*

Cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de las mismas.

Las Naciones Unidas, el 12 de febrero de 1998, suscribió “La Convención Internacional Para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas”; este cuerpo legal de Derecho Internacional, tuvo como base la Declaración Sobre Medidas Para la Eliminar el Terrorismo Internacional (Resolución 49/60, de la Asamblea General las Naciones Unidas de fecha 9 de diciembre de 1994, y la Resolución 52/210, de 17 de diciembre de 1996, también del propio órgano internacional).

En el artículo 2do de la citada Convención se estipula lo siguiente:

- 1. Comete delito... quien ilícita e intencionalmente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación de infraestructura.*
  - a) con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o*
  - b) con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico.*
- 2. También constituirá delito la tentativa de cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1ro.*
- 3. también comete delito quien:*
  - a) participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 ó 2 o,*

- b) *organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito enunciado en los párrafos 1º y 2º, o,*
- c) *contribuya de algún modo a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1º y 2º, por un grupo de personas que actúe con un propósito común; la contribución deberá ser intencionalmente y hacerse con el propósito de colaborar con los fines o la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito de que se trate.*

*El artículo 4to, de dicha Convención establece lo siguiente:*

*Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:*

- a) *“tipificar con arreglo a la legislación interna los actos indicados en el artículo 2 del presente Convenio.*
- b) *Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su naturaleza grave.*

Por su parte el artículo 5 del citado cuerpo legal internacional establece:

*Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluidas, cuando proceda, la adopción de la legislación interna, para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente convenio... no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica y biológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionadas con penas acordes a su gravedad.*

Todos estos tratados, incluso el Convenio Europeo para la Represión al Terrorismo, y a pesar de la mayor cohesión de los Estados, conservan un margen de discrecionalidad o soberanía para la calificación de los actos y actividades terroristas en orden a conceder o denegar la extradición de los responsables. No obstante, a efectos del ejercicio de la acción penal, una obligación que se contiene en todos estos tratados y que es parte de la opinión juris de los Estados manifestada en la resolución de la Asamblea General.

Los primeros tratados de extradición como ejemplo el celebrado en el siglo XII, entre el Rey de Inglaterra y el de Escocia, el pactado en el siglo XIV, entre el Rey de Francia y el Conde Saboya, y el que se firmó entre Pedro I, de Castilla – España- y el rey de Portugal en 1360, versaban justamente sobre la delincuencia política y, muy en particular, sobre el delito de Lesa Majestad.

La territorialidad de las leyes penales, la negativa de ejecución de las sentencias extranjeras, de una parte, y de la otra la facilidad de las comunicaciones que permiten escapar al infractor de la norma, hacen necesaria la extradición.

Se encuentra dentro del llamado Derecho Internacional Público, pues se refiere a relaciones entre Estados, es la extradición la única forma legal (al menos en

nuestra área geográfica, pues en Europa no lo es) de colocar a un sujeto que se halla en el extranjero a disposición de los Tribunales en contra de su voluntad- no cabe vías de hechos- y que a su vez las normas reguladoras de la extradición fijan determinados límites.

La extradición, de conformidad con el criterio de Jiménez de Asúa, “Es la entrega del acusado o del condenado para juzgarle o ejecutar la pena, mediante petición del estado donde el delito perpetróse , hecha por aquél país donde buscó refugio<sup>11</sup>”.

Se ha polemizado en la doctrina sobre la naturaleza de este instituto, para **Frank Von Liszt y Khler** es un acto de asistencia jurídica internacional, en tanto Garud solo observa en ella la reciprocidad jurídica. Para Jiménez de Asúa, es un acto de asistencia jurídica entre los Estados y no de una simple reciprocidad entre ellos<sup>12</sup>.

Se trata, pues, de un deber jurídico, independiente de todo convenio y, como ya habían afirmado **Grocio y Diego Covarrubias**, pero condicionado por el tratado. Este fundamento de derecho se completa con el interés, es decir con la utilidad.

La extradición puede ser activa, pasiva y de transito, esta última es tenida como administrativa en el artículo 375, del Código de Bustamante.

## I. VI TERRORISMO EXTRADICIÓN Y DELITO POLÍTICO.

En 1815, Inglaterra rechazó la extradición de delitos políticos. Su conducta fue seguida por otros Estados y encontró su consagración en el artículo 6to, de la Ley belga de 1ro de octubre de 1833, la que disponía “ *será expresamente estipulado que el extranjero no podrá ser perseguido o castigado por delito político anterior a la extradición ni por ningún hecho conexo a dicho delito*”.

Se ha afirmado que el delincuente político no se entrega para evitar el despotismo, se vigoriza el concepto de humanidad y, de acuerdo con Geyer, citado por Luis Jiménez de Asúa, “ Antes de entregar al que ha cometido un delito de esta clase seria preciso decidir, la legitimidad del gobierno que lo persigue”<sup>13</sup>.

Poco tiempo después de iniciarse la práctica decimonónica que consagró en el Derecho Internacional el principio de no extradición por delitos políticos, la generosidad de los Estados respecto del asilo se retraería en nombre de la moral y de la cooperación internacional para la prevención y represión de los actos y actividades terroristas.

<sup>11</sup> Jiménez de Asúa Luis: La Ley y el Delito, Principios de Derecho Penal. Ed, Hermes, Mexixo, Buenos Aires, 1954, p. 192.

<sup>12</sup> Jiménez de Asúa Lis Idem p. 194

<sup>13</sup> Jiménez de Asúas Luis : La Ley y el Delito, Principios de Derecho Penal. Ed. Hermes, México, Buenos Aires. 1954. p, 203.

En 1854, tras el atentado contra el Emperador Napoleón III, Bélgica encontró dificultades para extraditar a los responsables del mismo,<sup>14</sup> se inició la práctica legislativa de los Estados; tendente a instaurar límites al derecho de asilo; son las excepciones a la excepción del principio de no extradición por delitos políticos.

La extradición constituye un conjunto de actuaciones, ordenadas legalmente, para garantizar y en su caso disponer la entrega por las autoridades del Estado donde se haya una persona, reclamada por las autoridades de otro Estado, con el fin de responder de actividades delictivas o al objeto de que sea juzgada por sus órganos jurisdiccionales o cumpla la pena o medida de seguridad que se le impuso.

El fundamento del instituto de la extradición coincide con la justificación teórica de la existencia del Derecho Internacional y su utilidad resulta tanto más acentuada cuánto más frecuentes se hacen las huidas o evasiones de delincuentes a otros países para impedir la acción de la justicia ( a veces, con gran fortuna, eligen aquellos con los que no existen tratados de extradición ) y más patente resultan las conexiones y tramas internacionales de la delincuencia organizada y, en especial, del terrorismo.

Los principios inspiradores de la extradición, se indican a modo de principios o de criterios orientadores, constituyen un conjunto de postulados que rigen, en mayor o menor grado, como informadores de las normas o cláusulas de las leyes o tratados sobre extradición, relativos a los delitos objeto de extradición, al delincuente, a la pena y a las garantías procesales.

La extradición descansa sobre los tratados multilaterales o bilaterales, la gravedad de los hechos, el principio de legalidad, el principio de especialidad, el principio de identidad de la norma o de la doble incriminación, el principio de no entrega por delitos políticos, el principio de la reciprocidad y menor medida, el principio de la no extradición de los nacionales de un Estado; se manifiesta de diferentes formas, dependiendo del país que la solicita, el que entrega y el interés que pueda presentar un tercera nación

**La extradición activa:** el Código de Bustamante establece en su artículo 365, que para solicitar un reo que se refugió en otro país, ha de presentarse sentencia condenatoria o mandamiento de prisión, la filiación del reclamado y copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del hecho.

---

<sup>14</sup> En 1855, los Tribunales y el Gobierno belga tenían ante sí las solicitudes de extradición de dos nacionales franceses establecidos en Bélgica (Celestín y Jules Jacquin) responsables del atentado contra el Emperador Napoleón III, y su séquito, en septiembre de 1854, la Cour d'appel de Bruselas entendió tales hechos como delito político y, en consecuencia, emitió una opinión contraria a la extradición el 17 de febrero de 1855, aunque posteriormente el Tribunal Supremo belga casó esta decisión el 12 de marzo ya la cour d'appel de Lieja rechazó la demanda de excarcelación presentada por Celestin Jacquin, la Cour d'appel de Brucela mantuvo su opinión en base a una interpretación restrictiva en Derecho Internacional y de acuerdo con la Ley de 1ro, de octubre de 1833 ( acto de naturaleza voluntaria, y excepcional en relación con el asilo). Aunque en último lugar la decisión de extradición compete al ministerio de Justicia belga, Francia retiró las solicitudes de extradición. Los hermanos Jacquin fueron expulsados de Bélgica y encontraron refugio en el Reino Unido.

**La extradición pasiva:** en este sentido el Código de Bustamante establece en su artículo 351, que para conceder la extradición es preciso que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que pide o que le sean aplicables sus leyes penales.

**La reextradición:** es cuando un tercer país, fundándose en que el delincuente había cometido antes un delito en su país la demanda de aquél que obtuvo antes la extradición del lugar de refugio. Unas leyes la regulan y otras la silencian, más, en verdad, se trata de un concurso de extradiciones que se regula en el Código de Bustamante, de la siguiente forma:

Artículo 347.- *si la solicitud es por el mismo hecho, tiene preferencia el Estado donde se cometió.*

Artículo 348.- *si se demanda por hechos diversos, deberá entregarse al país donde se perpetró el delito más grave.*

Artículo 349.- *en la hipótesis de gravedad igual, ha de preferirse al que primero la solicitó, y si fue simultánea la demanda, decide el Estado requerido, sin embargo, deberá ser el país de origen del delincuente o aquél donde habita.*

La despenalización a efectos de la extradición en ciertos delitos políticos o conexos se generalizó a fines del siglo XIX, y durante el siglo XX. El terrorismo es un ejemplo de ello, y en este sentido en los Tratados adoptados por el Sistema de Naciones Unidas<sup>15</sup>. Por su parte en los artículos 1ro y 2do del Convenio Europeo para la Represión al Terrorismo se mencionan los actos de terrorismo que no se consideran (artículo 1, o que podrán no ser considerados artículo 2) como delitos políticos a efectos de la extradición.

El ámbito material restringido de la obligación del artículo 1ro, de La Convención Europea y la posibilidad de formular una reserva a esta disposición artículo 13, suscitó la adopción de un nuevo instrumento entre los Estados miembros de la Comunidad Europea,. Este nivel de cooperación intergubernamental, había instituido en 1975, el Grupo de Trevi, que reúne a los Ministros de Justicia y del Interior y que sirve como foro para la cooperación policial y de seguridad en particular para combatir el terrorismo.

Pero por la coincidencia en el tiempo de la cooperación para la represión del terrorismo en el seno del Consejo de Europa y en el marco de la cooperación política entre los Estados de Comunidad Europea, se decantó el carácter

---

<sup>15</sup> La extradición se contempla implícitamente en los artículos 13, ordinal 2do, y 15 acápite 1ro del Convenio de Tokio, cuyo artículo 16, numeral 2do expresa contundentemente que ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de crear una obligación de conceder la extradición. Más precisamente se regula en el artículo 8 de la Convención de La Haya y de Montreal y de La Convención de Nueva York de 1979, y el artículo 11 del Convenio de Roma. No obstante en ningún momento se establece una obligación de extradición incondicionalmente al o los presuntos terroristas. Sobre lo incierto de la práctica de los Estados respecto a la extradición, en particular en el complejo contexto jurídico- político intrínseco al fenómeno del terrorismo, la extradición participa como parte del Derecho Internacional y se basa en principios tales como la gravedad de los hechos, el principio de la doble incriminación y de la reciprocidad, el principio de la no extradición por delitos políticos y menor medida el principio de la no extradición de los nacionales de un Estado.



complementario de este nuevo instrumento; el 4 de abril de 1979, se adoptó por los Ministros de Justicia de la Comunidad Europea el Acuerdo de Dublín, concerniente a la aplicación del Convenio Europeo para la Represión al Terrorismo.

El Convenio Europeo de Represión del Terrorismo, no es en sí mismo un fundamento jurídico suficiente para los extradiciones; y además, autoriza a los Estados partes a reservarse el derecho de denegar la extradición respecto a los actos de terrorismo mencionados en su artículo 1ro, con la condición de que se comprometa a tomar debidamente en consideración, al calificar la naturaleza de la infracción, su carácter de especial gravedad artículo 13,<sup>16</sup> una gravedad que, por lo demás; puede llevar a la imposibilidad de invocar el Derecho de Asilo o de obtener el reconocimiento del Estatuto de Refugiado<sup>17</sup>.

Nos encontramos ante una obligación de comportamiento que requiere, de parte del Estado en cuestión, tomar en consideración de buena fe la gravedad del delito.

En las relaciones entre los Estados miembros de la Comunidad Europea, el Acuerdo de Dublín, paradójicamente, sigue admitiendo en su artículo 3ro la reserva contemplada en el artículo 13 del Convenio Europeo.

El Convenio Europeo tiene un ámbito de aplicación material que va más allá de los actos identificados como terroristas, es así como el apartado d) del artículo 1ro, incluye los delitos que impliquen raptos, toma de rehenes o secuestros arbitrarios, sin precisar por lo demás, que no será aplicable en el caso en que el delito haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto delincuente sean nacionales de dicho Estado o el presunto delincuente sea hallado en el territorio de ese Estado (artículo 13, de La Convención de Nueva York, de 1979) pero sobre todo el inciso e) de ese artículo 1ro, que incluye los delitos que impliquen la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas, o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilización represente un peligro para las personas- en torno al inciso f) que contempla la tentativa de comisión de algunos de los delitos anteriormente incorporados o la participación como coautor o cómplice de una persona que cometa o intente cometer dichos actos.

---

<sup>16</sup> El párrafo 1ro del artículo 13 precisa que la gravedad del acto terrorista estará en función, entre otras, de las siguientes circunstancias:

- a) Que ha creado un peligro colectivo para la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas, o bien.
- b) Que ha afectado a personas ajenas a los móviles que la inspira, o bien.
- c) Que para su realización se utilizara medios crueles o perversos.

<sup>17</sup> El artículo 1ro inciso f), de La Convención de 1951 establece:

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

- a) Que ha cometido un delito contra la paz; un delito de guerra o delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto a tales delitos.
- b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitido en él como refugiado.
- c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a la finalidad y los principios de las Naciones Unidas.

A pesar de ello, el citado artículo 13, del Convenio Europeo permite a los Estados reservarse el derecho de denegar la extradición respecto de los delitos cometidos en el artículo 1ro, que considere como delito político y que, dadas las circunstancias, no revista suficiente gravedad como para condicionar la calificación de la naturaleza del delito. Esto significa, sin duda, un límite a la discrecionalidad del Estado, puesto que se precisan parámetros de gravedad como son, en primer lugar, la creación de un peligro colectivo para la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas a semejanza de la circunstancia del artículo 2, que posibilita no considerar a un delito como delito político; en segundo lugar, que haya afectado a personas ajenas a los móviles que la inspiraron; y por último; que para su realización se utilizaron medios crueles o perversos. Pero no significa la despolitización de los actos y actividades terroristas<sup>18</sup>.

En el delito político, el estudio se ha dirigido hacia dos puntos esenciales, el bien jurídico que se ataca o pone en peligro y el móvil del agente, sea altruista o progresista, de querer cambiar el orden político, económico y social del Estado; en el delito político el autor actúa con pensamiento organizado y en secreto para lograr sus fines.

Existen dos posiciones relacionadas con la concepción del delito político. **La Objetiva;** que considera el delito político como una violación de las normas jurídicas, dejando sin valorar debidamente el acto humano, y toma en consideración la naturaleza del derecho violado, destacando la calidad del sujeto pasivo que es el Estado en su organización, en su forma, en sus fines, o el ciudadano como titular de los derechos político. **Y la subjetiva;** que realiza un análisis de la causalidad natural de los hechos a través del mundo moral en el que el sujeto está inmerso, otorga especial detenimiento a la intención perseguida por el agente comisario.

**José Enrique Solfa**, refiriéndose al delito político, acotaba la siguiente posición teórica:

- **Teoría Objetiva:** atienden a la objetividad jurídica del delito. Toman en consideración el bien jurídico tutelado y lo que lesiona, es decir, si afecta a la seguridad exterior o interior del Estado, será delito político por constituir una agresión a la organización estatal en sus bienes más importantes.
- **Teoría subjetiva:** las que consideran el móvil o fin que persigue el agente; atiende a la personalidad del autor y desentrañan los motivos de su conducta para considerarlo delito político.
  1. los que atienden al modo de ejecución del delito.

---

<sup>18</sup> La extradición entre los países de la Unión Europea se realiza a través de una **orden de detención europea**, que se realiza por un Juez del país de la Unión Europea que interesa al delincuente directamente a un Juez competente del país donde se encuentra el presunto delincuente, es decir no aplicar los principios de la extradición ni tampoco el procedimiento prevista para la misma se fundamenta por la aplicación del **principio de reconocimiento mutuo** que determina que el país de Unión que reciba la Orden Judicial y sea competente para su ejecución la realice de forma prácticamente automática sin necesidad que la autoridad judicial que ejecuta la orden realice un nuevo examen de la solicitud para verificar la conformidad de la misma en su ordenamiento jurídico interno.

2. las que consideran preferentemente las circunstancias concomitantes del delito para considerar su calificación.
3. las eclécticas que combinan las teorías anteriores.

No es un secreto para nadie que el delito político surgió como consecuencia de la lucha de clase, en defensa de los rebeldes contra la opresión de los pueblos. Alcanzó un reconocimiento en los códigos y leyes, recibiendo un trato benévolo y diferenciador del resto de los delincuentes fundamentalmente a partir del triunfo de la Revolución Francesa.

La característica esencial de los delitos políticos es que su fin ulterior que se propone el agente comisario consiste en acelerar el progreso, agilizar los cambios probablemente inevitables, lejos de entorpecer la marcha ascendente de la humanidad; expresa en sí aspiraciones, sentimientos masivos, progresistas y democráticos.

No debe bastar para definir las características de un delito político, el móvil de naturaleza política o social que preside los actos del infractor de la norma. Es preciso que sus finalidades sean las de construir regímenes políticos o sociales de catadura avanzada u orientados hacia el porvenir. Como delito evolutivo, constituye pasos hacia delante en el camino de la perfección.

El trato y reconocimiento especial reconocido en muchas legislaciones, es una realidad que resulta como consecuencia de la lucha de clase, de las conquistas progresistas alcanzadas universalmente; atribuyéndosele su actuar al “móvil altruista”, “móvil noble”, derecho de rebelión basados en las mayorías”, “voluntad del pueblo” o “intención laudable de progreso”.

A continuación realizaremos un breve recorrido por la doctrina en torno al delito político:

**Mariano Ruiz Funes**, en su libro “Evolución del Delito Político” trató el concepto de delito político con gran erudición y elevado sentido liberal. Harto sabido es que existen varios criterios para definirlos. El que atiende al bien jurídico lesionado y que es meramente objetivo; el que explora el móvil, adoptando así principios subjetivos. Ordinariamente se vincula a la Escuela Positivista la doctrina del móvil en el delito político, cuando en realidad podemos decir que se trata de una tradición francesa y que viene de los tiempos revolucionarios. En la ley interior de Francia sobre el tema de extradición, dictada en 1927, se atiende al móvil, que ha de apreciar el estado requerido <sup>19</sup>.

De acuerdo con **Eugenio Cuello Calón**, deben estimarse como delitos políticos no solo los que objetivamente manifiestan una obligación de carácter político. Así podría formarse esta definición. Es delito político el contenido contra el orden político del

---

<sup>19</sup> Ruiz Funes Mariano: citado por Luis Jiménez de Asúa en su obra La Ley y el Delito; Principios del Derecho Penal. Ed. Hermes México y Buenos Aires 1954 p. 203.

Estado, así como todo delito de cualquier otra clase determinado por móviles políticos<sup>20</sup>.

Desde el punto de vista filosófico un delito político es una actitud o un acto que tiene la intención de perturbar la existencia o integridad del Estado y la forma de su organización, mediante procedimientos directos que no están previstos en la Constitución ni en las leyes del Estado.

**Carrara**, confesó la indefinibilidad de esta especie de delincuencia, "pues lo que es ciertamente indefinible es lo político mismo, concepto variable y relativo cual ninguno"<sup>21</sup>.

**Soler y Salvagno**, reservan la idea de politicidad a los ataques contra el gobierno, con móviles altruistas y denegándosele a los que violan o ponen en peligro el régimen democrático como tal<sup>22</sup>.

**Haus**, afirma que el concepto de delito político tiene dos aspectos:

El exterior y el interior; **el exterior** se refiere a la soberanía del Estado y se constituye para la independencia, la integridad, el territorio nacional, así como las relaciones que se tengan internacionalmente.

**El Interior**, se refiere a la esencia del Estado, constituido por la forma de gobierno, los poderes públicos y los derechos políticos de los ciudadanos.

Para **Luis Carlos Pérez**, "el delito político es el ataque total o parcial o la constitución, organización, funcionamiento y sustitución jurídica de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), así como los mandamientos oficiales legalmente impartidos y la tranquilidad colectiva"<sup>23</sup>.

El profesor **Luis Jiménez de Asúa**, definió el delito político o evolutivo como... "El se perpetra por motivos altruistas con ánimo de apresurar, de un modo más o menos utópico, el progreso político-social"<sup>24</sup>.

**Jiménez de Asúa**, acepta como base para la determinación del delito político el móvil que llevó al autor a infringir la norma ha superado las teorías subjetivas y finalistas que no distinguían entre el propósito de hacer avanzar la humanidad y el hacerla retroceder.

<sup>20</sup> Cuello Calón Eugenio: Derecho Penal, México, Ed. Nacional, 1970, p. 127.

<sup>21</sup> Carrara, citado por Guillermo Portela: conferencias de Derecho Penal Universidad de La Habana. 1946.

<sup>22</sup> Soler y Salvagno; citado por Hector Garrido en su ensayo Delito Político y penalidad, publicado en ed Hermes 1999.

<sup>23</sup> Pérez, Luis Carlos: Derecho Penal, Tomo V, Ed. Temis, Bogotá 1984, p.231.

<sup>24</sup> Jiménez de Asúa, Luis desarrolló por primera vez su tesis sobre el delito político en la conferencia que tituló "Los delitos sociales y la reforma del Código Penal, dictada el 21 de abril de 1921, en La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

Enfatizaba **Jiménez de Asúa**. “No debe bastar, para definir las características de un delito político, el móvil de naturaleza política que preside los actos del infractor de la norma; es preciso que sus finalidades sean las de construir regímenes políticos o sociales de cataduras avanzadas hacia el porvenir.

Los delitos evolutivos son pasos hacia delante en el camino de la perfección. Las acciones delictivas guiadas por un designio político regresivo, que más que acelerar los pasos del progreso tienden a desandar la ruta, ya caminada, no deben ser inscriptas en la noble serie de la delincuencia política social.

El delito evolutivo es, en suma, el que se perpetra por motivos altruistas con ánimo de apresurar de un modo más o menos utópico, el progreso político social.

Para **Jorge Luis Hernández Figueroa**, quien tomó como eje central de su definición una teoría ecléctica de no atender solo a los móviles del delincuente, entiende que delito político es aquél que ataque un bien jurídico penalmente tutelado y está determinado por un fin político.

Para **Cobo del Rosal**, los delitos políticos son extralimitaciones de las libertades ciudadanas frente al poder o los derechos de libertades de los ciudadanos.

La causa más común de la delincuencia evolutiva en el aspecto de delito político, radica en el modo de organización del Estado y de la Sociedad, y en el deseo de sus autores de mejorar la política y las condiciones de la sociedad.

Hemos observado las dos posiciones sobre el delito político, la objetiva y la subjetiva. La concepción objetiva del delito político tuvo que ser completada con la Teoría Subjetiva, no era suficiente la naturaleza del delito violado y la calidad del sujeto pasivo, que como ya expresamos, es el Estado en su organización, en su forma y en sus funciones.

La Teoría Subjetiva, contemplando la calidad del agente comisor y la intención o finalidad que éste persigue, reconoció que el delincuente político es el que fue calificado por Jiménez de Asúa como altruista destacando el propósito de reemplazar sistemas sociales para sustituirlo por uno superior.

En la doctrina se niega terminantemente a la criminalidad terrorista el criterio de política, sino que suele implicársele en los delitos contra la humanidad y la paz. En muchas legislaciones y tratados científicos, estos delitos se agrupan en los delitos contra la comunidad, o de peligro general, poniéndose en evidencia el valor supraestatal que los mismos vulneran y amenazan.

## 1.- VII TERRORISMO: EXTRADICIÓN Y ACCION PENAL.

En supuesto que no haya lugar a la extradición, por las razones que sean, incluso cuando se concede el asilo o se reconoce el Estatuto de Refugiado, como garantía del

respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, los Estados partes están obligados a someter al terrorista a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, y así evitar lo que de otro modo resultaría en su impunidad.

Si el Estado en cuyo territorio se encuentra el terrorista no procede a la extradición (*primun dedere, deinde judicare*), estará obligado subsidiariamente, a someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos del ejercicio de la acción penal (*non dedere, sed judicare*). Esta obligación se contempla en los Tratados del sistema de Naciones Unidas<sup>25</sup>.

Las autoridades competentes tomarán la decisión que proceda en las mismas condiciones que para cualquier delito de carácter grave, con arreglo a las leyes del Estado. Así se aprecia en el artículo 7, de la Convención de La Haya, y la de Montreal, en el artículo 8, acápite 1ro, en La Convención de Nueva York de 1979, y en el artículo 10, ordinal 1ro, del Convenio de Roma. Asimismo el artículo 7, del Convenio Europeo, el párrafo 3ro, del artículo 3, del Acuerdo de Dublín.

El principio de la buena fe tiene particular importancia en este ámbito por la flexibilidad de esta obligación alternativa. Una vez descartada la opción de la extradición (*dedere*), se ha discutido el alcance de la otra acción (*punire, judicare o perseguir*), parece desprenderse de los textos, y así lo entiende la doctrina, que estaríamos más bien ante la obligación *aut dedere, aut persequi*, aunque solo sea en consideración a la independencia del poder judicial.

Por otra parte, la opción *persequi* acoge tanto a los Estados que se rigen por el principio de legalidad, como aquellos que se rigen por el principio de oportunidad para la apertura de las diligencias penales. El artículo 7, de la Convención de La Haya, (que tiene idéntico alcance que las disposiciones correspondientes de los otros tratados, en particular del artículo 7, del Convenio Europeo).

Para la represión de los actos y acciones terroristas los Estados tienen una obligación instrumental, es decir, la obligación de extraditar o someter el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del ejercicio de la acción penal; la pretensión de ayuda en materia penal establece que los Estados se prestaran la mayor ayuda posible por lo que respecta a todo proceso penal relativo al acto terrorista, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de cualquier tratado bilateral que regule, en todo o en parte, lo relativo a la ayuda mutua en materia penal. Esta obligación se incluye en los tratados adoptados en el sistema de Naciones Unidas<sup>26</sup> y asimismo, se contempla en el artículo 8, del Convenio Europeo para la Represión al Terrorismo.

---

<sup>25</sup> Una obligación insinuada en los artículos 13 acápite 2do, y 15 ordinal 1ro, del convenio de Tokio, pero expresamente consagrada en los artículos 7 de los Convenios de La Haya y Montreal, y de la Convención de Nueva York de 1973, que obliga a los Estados a proceder – sin ninguna excepción ni demora injustificada- artículo 8 numeral 1ro, de la Convención de Nueva York de 1979, y el artículo 10 ordinal 1ro del Convenio de Roma, en cuyo precepto se ordena sumisión a las autoridades, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido cometido o no en su territorio.

<sup>26</sup> Artículo 10 de la Convención de La Haya, artículo 11 del Convenio de Montreal, artículo 10 de la Convención de Nueva York de 1973, artículo 11 de la Convención de Nueva York de 1979, artículo 12 del Convenio de Roma,

Si la extradición tiene un fundamento eminentemente convencional<sup>27</sup> y su concreción se puede condicionar al principio de no extradición por delitos políticos, la obligación de detener, procesar y, en su caso condenar a los terroristas o presuntos terroristas encuentra fundamento no solo en el Derecho Internacional Convencional también en la obligación de prevenir actos y actividades terroristas contra otros Estados. Esta última es una obligación incuestionable del Derecho Internacional General cuyo enunciado se expresa en la Declaración de Principios del Derecho Internacional contenida en la Resolución 2625, (XXV) adoptada mediante consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970, y puede fundamentarse tanto en la costumbre internacional, como en los principios Generales del Derecho Internacional. Y la obligación de prevención implica y contiene la obligación de represión.

De este modo, en las Resoluciones 42/159, de 7 de diciembre de 1987, letra b), párrafo 5to, Resolución 44/29 de 4 de diciembre de 1989, letra b) párrafo 4to, y la 46/51 de 9 de diciembre de 1991, letra b), párrafo 4to, todos de la Asamblea General de las Naciones Unidas se insta a todos los Estados a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho Internacional y a que, con tal fin, aseguren la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los actos y actividades terroristas.

## **CONCLUSIONES**

Como obligado epílogo a todo trabajo científico debe redactarse un pliego de conclusiones que resuman puntualmente las principales ideas abordadas en el cuerpo de la investigación.

No se debe desconocer la dimensión humanitaria del asilo, como se desprende del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se enuncia en la Resolución 2312(XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un acto humanitario y pacífico, en tanto que tal no puede ser considerado por otro Estado como inamistoso.

La lucha contra el terrorismo es un factor que necesita la intensificación de la cooperación entre los Estados ya que los terroristas se prevalecen de la división del mundo en Estados soberanos, sin perder de vista sus convicciones humanitarias, todos los Estados tienen que reforzarse en el cumplimiento de la obligación *aut dedere, aut judicare*.

El tema de la lucha contra el terrorismo tiene que ser despolitizado, y asumido como verdadero compromiso por los Estados que conforman la comunidad de naciones.

---

especificando las Convenciones de Nueva York y el Convenio de Roma que la ayuda incluiría – el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

<sup>27</sup> La Resolución 731 de 1992, de 21 de enero adoptado por el Consejo de Seguridad en el asunto Lockerbie, que constituyó la primera tentativa internacional para imponer una cooperación judicial obligatoria en concreto de Libia para con los Estados Unidos de América, Reino Unido y Francia encuentra su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas en particular el artículo 25 en relación con el artículo 103.



El tema de los refugiados ha sido utilizado en contra de Cuba, por los Estados Unidos de América desde el 1ro, de enero de 1959.

La extradición puede jugar un importante papel en la lucha contra el terrorismo.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- . Casares, Julio: Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Ed, Gustavo Gili, S:A, Barcelona, 1984.
- Pastor Ridruejo José Antonio: Curso de Derecho Internacional público y Organización Internacional, 4ta ed.,Madrid 1992.
- López Garrido Diego: El Derecho de Asilo, Madrid1991
- Jiménez de Asúa Luis: La Ley y el Delito, Principios de Derecho Penal. Ed, Hermes, Mexixo, Buenos Aires, 1954.
- Jiménez de Asúa Luis: Idem
- ----- : La Ley y el Delito, Principios de Derecho Penal. Ed. Hermes, México, Buenos Aires. 1954.
- Cuello Calón Eugenio: Derecho Penal , México, Ed, Nacional , 1970.
- Guillermo Portela : Conferencias de Derecho Penal Universidad de La Habana . 1946.
- Garrido Héctor en su ensayo Delito Político y penalidad , publicado en ed Hermes 1999.
- Pérez, Luis Carlos : Derecho Penal, Tomo V, Ed. Temis , Bogotá 1984.
- Plan de Acción de Milán 6 de septiembre de 1985.
- Resolución número 40/61, de 9 de diciembre de 1985.
- El periódico NEWSDAY, de fecha 5 de mayo de 1971.
- Convenio Europeo Sobre Represión al Terrorismo, de 27 de enero de 1997.
- Convención Interamericana Contra el Terrorismo, aprobada en la Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Interamericanos del 3 de junio de 2002, Resolución 1840 (XXXIL-0/02).
- Resolución 2625, (XXV) de octubre de 1970 de Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Resolución 1189 de 13 de agosto de 1998, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  - Convenio para la represión del apoderamiento de aeronaves, firmado en La Haya, el 16 de diciembre de 1970.
  - Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
  - Convenio sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobado el 14 de diciembre de 1973.
  - Convenio internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas firmado el 17 de diciembre de 1979.

- Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
- Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicio a la aviación civil internacional complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, aprobado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, realizado en Roma el 10 de marzo de 1988.
- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental adoptado en Roma el 10 de marzo de 1988.
- Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, elaborado el 15 de diciembre de 1997.
- Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmado el 9 de diciembre de 1999.
- Resolución 2312, (XXII), de 14 de diciembre de 1967 de las Naciones Unidas.
- Resolución 2312, (XXII), de 14 de diciembre de 1967
- Convención de Ginebra de 1951 de La Asamblea General de las Naciones Unidas.
- La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en Ginebra el 28 de julio de 1951, de Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, elaborado en Nueva York el 31 de enero de 1967 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Convención relativa al Estatuto de Refugiado de 28 de octubre de 1933.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
- Convención Sobre la Prevención y el Castigo de Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, de 14 de diciembre de 1973

## EVENTOS



### VIII ENCUESTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2006

*Estimado colega:*

*La Fiscalía General de la República y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID), se complacen en informarle que del **21 al 24 de noviembre del año 2006** se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, **el VIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2006**.*

*Este evento, ya tradicional en el ámbito nacional e internacional por su alcance y contenido, cumple más de una década con su octava edición Ciencias Penales 2006, que reunirá a profesionales y técnicos interesados en la materia para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas que lo integran.*

*Los eventos Ciencias Penales, se han celebrado cada dos años de forma ininterrumpida a partir de 1992, con creciente participación de destacados especialistas de las más diversas latitudes, lo que unido a la actualidad de sus temáticas, han convertido a este foro, en uno de los cónclaves científicos de mayor prestigio internacional en Iberoamérica.*

*En virtud de lo expuesto, plácenos sobremanera extenderle muy cordialmente una cálida invitación para compartir las sesiones de este importante evento.*

*Fraternalmente,*

Comité Organizador

## TEMAS DEL EVENTO

- **Sociedad, Terrorismo y Derecho Penal**
  - El Derecho Penal versus terrorismo
  - Derecho Internacional y enfrentamiento al terrorismo
  - Lucha contra el terrorismo y garantías procesales
- **Delito Transnacional y Globalización**
  - Crimen organizado, droga y drogadicción
  - Tráfico internacional de drogas: raíces y tratamientos

- Crimen organizado y lavado de dinero
- Delito transnacional y la red de comunicación mundial
- **Tráfico internacional de personas**
- Derecho Penal Internacional y los Derechos Humanos
- Los conflictos internacionales en la actualidad y los crímenes de guerra
- La justicia penal internacional. Nuevos retos para los países de menor desarrollo.
- El Derecho Penal de la postmodernidad
- El debido proceso
- Papel del Fiscal en el proceso penal moderno
- Principio de oportunidad y de legalidad en el ejercicio de las acciones penales
- El juicio oral en la modernización del proceso
- Contribución de la criminalística a la justicia penal
- Tratamiento penitenciario y la reinserción social
- La administración de justicia de menores: enfoque contemporáneo
- Papel de la medicina legal y la psiquiatría forense en el proceso penal
- Pensamiento criminológico transdisciplinario. Teoría y metodología
- Investigación Criminológica. Tendencias y realidades
- Delincuencia, desarrollo socioeconómico y control social
- Delincuencia ecológica: Caracterización
- Personalidad y conducta delictiva
- Delincuencia, género y violencia
- Delincuencia, ciclo vital y violencia
- Perspectivas y desarrollo actual de la Victimología
- Trabajo social victimológico

## **PARTICIPANTES**

El evento va dirigido fundamentalmente a abogados, jueces, fiscales, médicos legistas, penitenciaristas, criminólogos, victimólogos, sociólogos, psicólogos, profesores universitarios, así como a cualquier otro especialista interesado en sus temáticas.

## **PROGRAMA CIENTÍFICO**

El Programa Científico del Congreso se desarrollará en sesiones plenarias, talleres, paneles y mesas redondas. Se impartirán conferencias magistrales por destacados científicos sobre aspectos de mayor interés y actualidad.

## **IDIOMAS DE TRABAJO**

Español y Inglés

## **CUOTA DE INSCRIPCIÓN**

**230.00 CUC**

## **PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS**

Los trabajos deberán ser presentados a la Comisión Técnica antes del 1 de agosto del año 2006 para que puedan ser incluidos en el Programa Científico del Encuentro. Los trabajos serán entregados en original y copia, mecanografiados a espacio y medio, consignándose siempre el título, generales del autor, Institución y datos para su localización, acompañados de una copia en disquetes de 3½, utilizando el procesador de textos Word en soporte Windows, para asegurar su reproducción en la memoria del evento.

## **CORRESPONDENCIA**

Lic. Miguel Angel García Alzugaray  
 Coordinador Comité Organizador  
 Fiscalía General de la República de Cuba  
 Amistad No.552 entre Monte y Estrella, Centro Habana  
 La Habana, Cuba, CP 10200  
 Teléfono: 867-0795 Fax: (537)8670795  
 E-mail: [relaciones@fgr.cu](mailto:relaciones@fgr.cu)  
[idad@fgr.cu](mailto:idad@fgr.cu)

Lic. Migdalia Luna Cisneros  
 Organizadora Profesional de Congresos  
 Palacio de Convenciones de La Habana  
 Calle 146 entre 11 y 13, Playa  
 La Habana, Cuba, CP. 16046  
 Teléfono: 2086176  
 Fax: (537)202-8382  
 E-mail: [Migdalia@palco.cu](mailto:Migdalia@palco.cu)



## ***GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS JURIDICOS***

### ***D***

#### ***Daños***

En Derecho Penal, delito que implica la comisión de actos que lesionan la propiedad ajena. Comúnmente se conoce con el nombre de vandalismo.

#### ***Debido procedimiento de ley-***

Es la aplicación correcta y adecuada de la ley en el curso regular de la administración de la justicia en los tribunales. La garantía del debido procedimiento requiere que cada persona tenga un juicio justo, tramitado de conformidad con las normas y solemnidades prescritas para determinar culpabilidad o adjudicar derechos.

***Demeanor-***

Voz inglesa que se refiere a la apariencia general de una persona y a sus expresiones gestuales, las cuales pueden influir en la apreciación que de ella, de su testimonio o de sus actuaciones pueda hacer un tercero.

***Denuncia-***

Es la querrela que formula la policía, la cual sirve de base para la determinación de causa probable para arrestar. No es lo mismo que acusación, aunque, en delito menos grave, una vez se ha determinado la existencia de causa probable para arrestar, la denuncia se puede utilizar como pliego acusatorio. No así en el caso de delito grave. Véase acusación.

***Deposición-***

Testimonio de cualquier persona en forma de examen oral o de interrogatorio por escrito que se toma fuera de juicio.

***Derecho adjetivo-***

La ley que regula o prescribe los procedimientos. Ejemplo: Reglas de Procedimiento Civil, Reglas de Procedimiento Criminal, Reglas de Evidencia o de Derecho Probatorio.

***Derecho común español-***

Se refiere al derecho general español, de aplicación a todo el territorio nacional. Se contrapone al derecho particular (provincial, municipal, local) llamado también derecho foral. En España se decía especialmente del Derecho de Castilla, que por su gran difusión en la península pasó a concebirse como derecho común. Distíngase del derecho común ("Common Law") de la tradición angloamericana.

***Derecho sustantivo-***

Ley que establece, define y reglamenta los derechos, deberes y obligaciones. Ejemplo: Derecho Penal, Derecho Civil, etc.

***Descubrimiento de prueba-***

Procedimiento por el cual una parte en una acción puede obtener de la parte contraria información, documentos, etc., que le son necesarios para preparar su caso.

***Desestimación-***

Acción y efecto de declarar sin lugar; distíngase de "desistimiento".

***Desestimación sin perjuicio-***

Acción de declarar sin lugar una causa de acción sin que la parte demandante pierda su derecho a reclamar nuevamente fundándose en la misma causa de acción.

## ***NOTICIAS Y CURIOSIDADES***

-En 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina: la cocaína.

-La noche anterior a su ejecución Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII pidió ensayar su decapitación.

-Cuando en 1865 se realizó la autopsia al doctor James Barry, cirujano del ejército en la batalla de Waterloo, se descubrió que en realidad era mujer. En aquel entonces la medicina estaba vetada al sexo femenino.

-El rey Gustavo III de Suecia estaba convencido de que el café era un veneno. Para demostrarlo, ordenó a un reo tomar café todos los días y a otro tomar té. El experimento, que fue seguido por una comisión médica, fue un fracaso: los primeros en morir fueron los médicos condenado  
a beber té y por último el bebedor de café.

@

En la Edad Media se usaba como una abreviatura de la preposición "ad" (en). En los primeros sistemas de correo electrónico @ se utilizó por varios motivos: porque era un signo muy reconocible, porque ya se usaba en la informática y porque estaba en los conjuntos básicos de caracteres.